

# EDITORIAL

## ANTE EL GRAN VIRAJE.

Por primera vez en la ordenada trayectoria política chilena, sorpresiva y sorprendentemente, una elección presidencial ofrece al país la certeza de profundas transformaciones de su estructura socio-económica y cultural.

Al proclamar los derechos de la comunidad por encima de los intereses de grupos o individuos, al vulnerar en alguna medida el sagrado patrón de la sociedad de consumos, se ha dado también un paso por la liberación de la arquitectura hacia la posibilidad de cumplir su objetivación social y trascender su contenido humanista. En efecto, todos sabemos como gravita en nuestra conciencia profesional la verdad inobjetable de que cuando la vivienda, el suelo urbano y rural, los materiales básicos de construcción y el trabajo humano son objeto de especulación, monopolio y lucro como cualquier otro bien social, se limita y distorsiona, cuando no se anula, sencillamente, el objeto y la razón profunda de la acción desarrollada por arquitectos y planificadores en beneficio de la sociedad.

También es suficientemente sabido que las estructuras capitalistas, sin excluir de ellas a los países de alto desarrollo - crean una brecha demasiado profunda entre los grupos que disfrutan de una alta tecnología de confort y otros, mayoritarios, que en mayor o menor grado quedan marginados del derecho a su ámbito. Y que en el mejor de los casos, las experiencias fallidas de control del desarrollo urbano en los márgenes de economía liberal que conocemos, han transformado en patéticamente inhabitables a la mayoría de las metrópolis modernas. Entre nosotros, los fenómenos de marginalidad habitacional, de extensión y disfunción urbanas, de desvalorización ambiental que tantas veces han sido destacados en estas columnas tienen tal magnitud que cualquiera tentativa aislada de la arquitectura, por exitosa que parezca, nace alienada en sus posibilidades de contribuir a una modificación del entorno.

En consecuencia, desde diferentes ideologías políticas en que deseemos situarnos, los arquitectos, por respeto a nuestro oficio, no podemos sino acoger como un hecho positivo y altamente promisorio, esta gran apertura nacional hacia perspectivas sociales más avanzadas. Y si queremos ubicarnos en un enfoque más especializado, es también una apertura hacia la programación, el diseño y la producción arquitectónica nacionalizadas, hacia formas de trabajo interdisciplinario, hacia experiencias profesionales de mayor trascendencia técnica y más alta ética social.

La validez de lo ya señalado, siendo inobjetable, solo se justifica en la medida en que la proyectemos a un plano real y no a un optimismo idealista e ingenuo. No ignoramos que, junto a las nuevas posibilidades, acechan nuevos riesgos. Para muchos, no desprovistos de alguna sustentación histórica, economía dirigida implicaría burocracia, prioridad para los intereses de la masa: anulación de la individualidad; racionalización o producción masiva llevaría a mediatizar la arquitectura, destruir la creatividad. Efectivamente, tales podrían ser efectos negativos de un vanguardismo sectario o ciego aplicado a nuestro trabajo, pero está de por medio la madurez cultural y política de este país y la experiencia ilustrativa de otros para ahorrarnos esa inquietud.

## LA POLITICA DEL INTERREGNO.

Otro fenómeno de proyección insospechada aparece en el horizonte nacional, precediendo al evento electoral. Es lo que podría denominarse "crisis psicológica" o, más dramáticamente por algunos: "suicidio económico". Como secuela de una tremenda presión publicitaria ejercida sobre la conciencia de los chilenos durante la campaña electoral, sin éxito inmediato por parte de los sectores interesados, el pánico financiero ha comenzado a invadir los estratos de la producción y el consumo en una suerte de reacción en cadena cuya profundidad y extensión ya ha rebasado la acción e intención de sus patrocinadores puesto que compromete los intereses de todos los ciudadanos.

En particular los arquitectos, diseñadores o contratistas de ejercicio profesional privado han visto disminuir violentamente sus fuentes de trabajo por la contracción del mercado de viviendas y del precario sistema de crédito en que éste se equilibra.

Se plantea así un problema de supervivencia para el profesional, el pequeño y mediano industrial y, finalmente, para los trabajadores amenazados de cesantía, tanto más difícil cuanto más débil económicamente sea el afectado.

Hasta el momento en que el nuevo gobierno asuma el control del país e inicie sus planes de desarrollo, la situación financiera descansa materialmente en manos de la administración actual pero psicológicamente, en la Unidad Popular. A la primera corresponde arbitrar las medidas de control para evitar la extensión de la crisis y de auxilio o crédito para suplementar los recursos donde las actividades productivas muestran síntomas de asfixia, como es el campo de la construcción, por ejemplo. Pero a la segunda colectividad, que próximamente se hará cargo del poder, corresponde la tarea de devolver la confianza de los medios capitalistas nacionales no monopolistas, de los medianos y pequeños productores o propietarios urbanos y agrícolas. Para todos los que infundadamente se sienten amenazados de expropiación, represión o restricción de sus libertades personales - transformados involuntariamente en agentes o activistas de la crisis de terror financiero - la Unidad Popular deberá encontrar argumentos y hechos en favor de su convencimiento y restauración de la confianza pública.

La acción mancomunada de recursos financieros, decisiones políticas y medios psicológicos deberá ser efectiva, por cuanto las fuerzas económicas del país, sus medios de producción y sus riquezas básicas están intactas y potencialmente operantes. Los grupos dirigentes de cualquiera ideología interesados en el futuro de Chile tienen ahora una responsabilidad conjunta en la cruzada de saneamiento de la economía nacional.

## LOS PLANES.

En los planteamientos programáticos de la Unidad Popular hemos conocido diez proposiciones o lineamientos generales para el enfoque del problema de la vivienda, de tanta significación en el contexto de su acción política. En ellos se establecen prioridades para atender a las poblaciones marginales y planes de remodelación popular y se auguran los cambios institucionales en los organismos de asignación y ahorro para la vivienda tendientes a democratizar sus procedimientos, proteger los sectores económicamente débiles de la comunidad y absorber la cesantía inicial.

Pero se aproxima el momento de pasar de las postulaciones programáticas a las decisiones ejecutivas, a la puesta en marcha. La tarea es de tal trascendencia que en alguna medida debería quedar abierta a las opiniones de arquitectos, urbanistas y técnicos de las diferentes especialidades como también a los sectores sindicales y de pobladores que tienen atención en el tema; obviamente sin limitación en cuanto a posiciones ideológicas si ellas están motivadas en el beneficio social. Hay que trazar una política capaz de modificar en pocos años todo el cuadro habitacional de este país y liquidar los déficit seculares. Es un desafío extendido a todos quienes sientan la vocación social de su trabajo y la honestidad de sus ideas. Las metas ambicionadas no podrán alcanzarse mediante exclusiones basadas en sectarismos políticos ni con una mecánica de acción burocrática-rutinaria. Por el contrario, se requerirá de mucha audacia creadora por parte de los planificadores apoyada en una gran vocación de sacrificio social por la población entera, sumada al esfuerzo del plan.

A partir de hoy, AUCA se incorpora a esta cruzada nacional para ocupar su modesto pero significativo frente de trabajo.

EL COMITE DE REDACCION